

DESAFÍOS A LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA



SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA
2026



INTRODUCCIÓN

Solidaridad Democrática (SD), un proyecto de la Fundación Forum 2000, persigue fomentar una solidaridad internacional efectiva en América Latina para promover la democracia y sus valores. SD nació como una plataforma regional para generar ideas, cooperación y respuestas concretas que fortalezcan la democracia, impulsen salidas democráticas a las dictaduras y expresen solidaridad con víctimas de violaciones a los derechos humanos. SD actúa como un grupo en defensa de principios e instituciones democráticas cuando estén amenazados. En las reuniones de SD, sus miembros buscan identificar los desafíos actuales y problemas más graves de la democracia en la región y proponer soluciones y pasos concretos para abordar estas situaciones. Con este propósito, SD publica anualmente el documento “Desafíos a la democracia en América Latina”, definiendo los mayores temas para el futuro de la democracia en América Latina en el año entrante.



VENEZUELA, LA CAÍDA DE MADURO Y LAS DUDAS POR EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA

El 3 de enero, **Estados Unidos** ejecutó una operación militar en Venezuela que concluyó con la detención y traslado a territorio norteamericano del entonces presidente (de facto) Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para ser juzgados ante la justicia de Nueva York por acusaciones vinculadas al narcotráfico.

La operación militar y la caída del dictador fueron recibidas con algarabía por parte de la enorme diáspora venezolana. Sin embargo, las dudas respecto al futuro del país sudamericano no tardaron en llegar. Este episodio apenas comienza; su trayectoria y desenlace son, por ahora, impredecibles. Ha caído un dictador y será juzgado, esto siempre es algo positivo. Por otra parte, Delcy Rodríguez, la flamante mandataria venezolana, no tiene ninguna credencial democrática y representa una clara continuidad del régimen anterior.

Por ende, las dudas, persisten. ¿Cuál será el rol de **Estados Unidos** en **Venezuela**? ¿Cuáles pueden ser los próximos

pasos del presidente electo de **Venezuela**, Edmundo González y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado para consolidar una transición democrática? ¿En qué medida seguirán operando los cárteles de narcotráfico y otras bandas criminales en su territorio? ¿Será éste el comienzo de una transición democrática que aleje los intereses de fuerzas extranjeras como **Cuba**, **China**, **Irán** y **Rusia**? ¿Qué rol tendrán la comunidad democrática internacional y la latinoamericana en todo este proceso?

El destino de **Venezuela** en gran medida determinará el destino de la democracia en la región. Por eso, resulta fundamental que la comunidad democrática internacional y, particularmente, la latinoamericana, alcen su voz para exigir el retorno de la democracia en la República Bolivariana, la liberación incondicional de todos los presos políticos, y la restitución de los derechos de reunión y manifestación pacíficas, de asociación, de expresión y de participación política.



AMÉRICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA GEOESTRATÉGICA

A finales de 2025, la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos puso de manifiesto el retorno explícito de la Doctrina Monroe adaptada al contexto contemporáneo, con un enfoque geopolítico centrado en asegurar la primacía estadounidense en el hemisferio occidental y limitar el avance de potencias externas como **China** y **Rusia**. La acción en **Venezuela** puede ser una muestra de su implementación.

En paralelo, **China** publicó su tercer Documento de Política hacia América Latina y el Caribe, en el que presenta una narrativa de cooperación “horizontal” basada en el desarrollo compartido, la no injerencia y el fortalecimiento del Sur Global. De ahí que su postura respecto a lo sucedido en Caracas haya sido exigir la seguridad y libertad de Maduro, con quien representantes de Pekín estaban manteniendo reuniones esos primeros días de 2026. En esta línea, la estrategia china tiene objetivos geopolíticos bien definidos: reducir el respaldo regional a Taiwán, consolidar apoyos diplomáticos en foros multilaterales y profundizar dependencias económicas de largo plazo.

Una de las grandes apuestas de **China** en la región es el mega puerto de Chancay en **Perú**, operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP) y que implicó una inversión de 1.300 millones de dólares. A un año de su inauguración, la obra que tanto debate generó, comienza a mostrar resultados de apariencia positivos, reduciendo los tiempos de transporte entre Perú y China y generando beneficios en el comercio entre ambos países.

Estados Unidos parece ahora interesado en contrapesar la presencia de **China** en la región, pero aún no resulta claro si lo hará solo a través de aranceles, presiones, amenazas e intervenciones militares y económicas (sanciones) o si también involucrará algún esfuerzo financiero que pueda traer beneficios al continente.

Al mismo tiempo, los avances hacia la aprobación del acuerdo Mercosur–Unión Europea pueden actuar como un contrapeso frente a las tensiones geopolíticas entre **Estados Unidos** y **China**, ofreciendo un anclaje institucional que contribuya a moderar la deriva ideológica y fortalecer la cooperación internacional de la región. La UE ya es uno de los principales socios comerciales e inversores en América Latina, y la aprobación del acuerdo, que está cada día más cerca de concretarse, le daría a América Latina una asociación profunda y basada en reglas con otro gran polo de la economía mundial. Sin embargo, los obstáculos burocráticos y políticos en la UE no parecen acabar. Solo queda preguntarse si Bruselas estará a la altura de los tiempos que corren.

Si la Unión Europea logra avanzar de manera concreta con este acuerdo, podría consolidarse como un actor relevante y previsible en un entorno global fragmentado; de lo contrario, correrá el riesgo de perder influencia frente a otras potencias que compiten por vincularse con América Latina.





EL NUEVO MAPA POLÍTICO LATINOAMERICANO

2025 fue un año con procesos electorales clave que, más allá de sus resultados, encendieron las alarmas respecto a la importancia de las instituciones y los órganos electorales, y nos interpelan en términos de cómo contribuir a su independencia y funcionamiento, frente a los embates del poder.

Los resultados en **Argentina**, **Bolivia**, **Chile** y **Honduras** parecen apuntar al derrumbe de gobiernos de izquierda y a un giro hacia la derecha en la región. Aun así, es temprano para saber si la tendencia persistirá o cuál será su impacto real, pero si algo dejaron claro estas elecciones es que la administración de Donald Trump no permanecerá ajena a las contiendas electorales en la región. Tanto en el caso de **Argentina**, como en el de **Honduras** y, desde incluso antes de que se hablara de elecciones, en el caso de **Brasil**, el presidente estadounidense no ha dudado en expresar su simpatía por los candidatos afines y amenazando con retirar su apoyo si no triunfaban. Habrá que ver si se produce en la región un rebrote del nacionalismo/antiimperialismo y cómo esto afectará a los candidatos apoyados por Washington.

En 2026, **Brasil**, **Colombia**, **Costa Rica**, **Perú** y, probablemente, Haití irán a las urnas para elegir presidente. Considerando la relevancia de esos enclaves políticos para **Estados Unidos** (especialmente **Colombia** y **Brasil**) es de esperar que Washington también busque ser protagonista en la contienda.

La influencia de Trump además se ha hecho presente a través del impulso de movimientos conservadores y ultraconservadores como CPAC o el Foro de Madrid, que han consolidado estructuras en América Latina, preparados para disputar espacio al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. En este escenario polarizado, uno de los mayores desafíos para la sociedad civil será permanecer al margen de la guerra ideológica y sostener posiciones basadas en el estado de derecho, la tolerancia y el respeto democrático.

En este contexto, los desafíos para los nuevos gobiernos no son menores. Por mencionar algunos, en **Bolivia**, Rodrigo Paz necesitará reactivar una economía en crisis sin una estructura partidaria fuerte que le dificultará lograr los consensos necesarios en un país altamente polarizado. En **Honduras**, el próximo gobierno también tendrá desafíos similares, sumado al estado de emergencia por temas de seguridad. Por su parte, el presidente electo en **Chile**, José Antonio Kast, tendrá el desafío de crear y encabezar una coalición que dé respuestas concretas a la población andina.

América Latina inicia un 2026 con ascensos de gobiernos de centroderecha y derecha. Estas afinidades pueden ofrecer créditos inmediatos, pero habrá que ver si generan soluciones sostenibles. Para eso, la sociedad civil debe convertirse en un factor de cohesión y exigir a los gobiernos políticas de estado, estables y orientadas al interés regional.



CRIMEN ORGANIZADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA

Como en otras regiones, en América Latina las organizaciones criminales, cada vez más transnacionalizadas, entendieron que no basta con enfrentarse al Estado: necesitan vincularse con gobiernos y funcionarios. A su vez, los regímenes autoritarios han encontrado en el crimen organizado un aliado que financia sus arcas personales, sus campañas y, en algunos casos, les brinda protección mutua.

El caso venezolano —el *Tren de Aragua* y el *Cartel de los Soles*— es emblemático. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder (en 1999), la frontera con **Colombia** se abrió a la presencia de las FARC, sus disidencias, y el ELN, generando un entorno ideal para el narcotráfico. Con la radicalización del gobierno bolivariano, los vínculos entre estos grupos y las autoridades venezolanas crecieron hasta el punto en que figuras como el propio expresidente Nicolás Maduro y su ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, son señaladas como líderes del Cartel de los Soles.

Sin embargo, el caso de **Venezuela** no es único ni aislado. En **Ecuador**, el auge de bandas como *Los Lobos*, que operan en múltiples provincias y están vinculadas con cárteles transnacionales (fundamentalmente de México), ha sido acompañado por un incremento de la violencia homicida, enfrentamientos entre grupos y crisis en el sistema penitenciario. Salvando las distancias, en **México** los cárteles siguen expandiendo su influencia, con altos

niveles de violencia estructural y en **Brasil** organizaciones como el *Primero Comando da Capital (PCC)* y el *Comando Vermelho*, mantienen una presencia significativa tanto en el sistema penitenciario como en las periferias urbanas.

La evolución del fenómeno es hoy transnacional. Redes terroristas vinculadas a Irán y Hezbollah lavan dinero en la región con apoyo de carteles locales, evidenciando que el crimen organizado dejó de ser un problema doméstico para convertirse en una estructura diversificada que atraviesa fronteras y erosiona las instituciones encargadas de combatir tanto a las mafias como al autoritarismo.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump lanzó operaciones contra el narcotráfico en el Caribe. Aunque su eficacia es incierta —particularmente frente a estructuras criminales descentralizadas—, la preocupante medida (considerada por muchos como de ejecuciones extrajudiciales) ha generado críticas. La detención de Nicolás Maduro y su esposa y su juicio en Nueva York son otro paso en ese mismo esfuerzo por controlar el narcotráfico en el hemisferio, pero existen dudas de si es solo el comienzo y si esto tendrá un impacto cierto.

La ciudadanía exige seguridad. Y si los gobiernos —incluido el de Estados Unidos— quieren responder, deben comprender que ningún país puede enfrentar solo al crimen



organizado ni al autoritarismo asociado. La cooperación regional —e incluso global— es indispensable.

Sumado a esto, el aumento en los índices de violencia y homicidios, y la mayor presencia del crimen organizado, con hechos de violencia sin precedentes, presentan las condiciones perfectas para el ascenso de fuerzas autoritarias e iliberales que ponen en riesgo el estado de derecho, los derechos humanos y la democracia en la región.

El desafío es encontrar un equilibrio entre seguridad y democracia, entre firmeza en el combate al crimen y respeto al estado de derecho. Aunque evidente en teoría, este equilibrio no siempre resulta fácil de identificar en la vorágine nacional. En ese marco, la sociedad civil —organizaciones, medios de comunicación, universidades— debe aportar claridad, evitando caer en debates morales interminables o en soluciones simplistas que solo alimentan las respuestas populistas.



ENTRE EL APOYO DEMOCRÁTICO Y LA FRUSTRACIÓN CIUDADANA

La edición más reciente del Latinobarómetro ofrece señales mixtas. Por un lado, el apoyo al sistema democrático alcanza el 52%, recuperándose de números más bajos y demostrando que hay resiliencia democrática en el continente. Por otro, la insatisfacción con su funcionamiento, aunque algo menor que en años previos, sigue siendo alta: 64%. A esto se suma un dato preocupante: crece el número de latinoamericanos que cree que la democracia podría funcionar sin partidos políticos (42%) y sin Congreso (39%).

Esta desilusión tiene raíces claras. En gran parte de la región, la democracia no ha logrado ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas. La persistente brecha entre riqueza y pobreza y la falta de oportunidades, alimentan la percepción de que la democracia no “entrega” bienestar. Un caso a seguir será **Bolivia** —después de casi dos décadas del experimento socialista, crecientemente autoritario, es reemplazado por el gobierno de Rodrigo Paz, cuyo mandato se basa en la promesa de reestablecer tanto el orden democrático, como el funcionamiento económico. Habrá que ver si en el 2026 empieza a cumplir estas expectativas o si se repetirá la decepción del gobierno interino del 2019-2020.

Las vocaciones reformistas de Javier Milei en **Argentina**, Bernardo Arévalo en **Guatemala** o Daniel Noboa en **Ecuador**, salvando las distancias y diferencias, abren una expectativa similar en distintos contextos nacionales: la promesa de romper con inercias políticas y ofrecer respuestas más eficaces. La incógnita es si estos liderazgos lograrán traducir ese impulso reformista en instituciones más funcionales y políticas públicas sostenibles, o si, por el contrario, terminarán profundizando la frustración popular que hoy atraviesa a la región.

Y es que el desafío excede a cualquier liderazgo individual. No se trata de un problema de resolución simple ni inmediata. La desigualdad y la pobreza en América Latina tienen componentes estructurales y arrastran factores históricos que limitan los márgenes de acción de los gobiernos. Por eso, más que “reinventar la rueda”, el reto central pasa por repensar el aparato estatal y sus instituciones para hacerlas más eficientes y permitir que la ciudadanía acceda de manera real y sostenida a los beneficios de la democracia.



INTEGRACIÓN REGIONAL: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

Tal como ha quedado claro en la sección de crimen transnacional, la cooperación intrarregional se vuelve un imperativo y representa una oportunidad, ya que no solo blindaría la seguridad de la región, sino que generaría la **confianza política necesaria** para avanzar hacia una integración más profunda que reduzca vulnerabilidades y aumente márgenes de maniobra frente a actores externos.

Sin embargo, en América Latina el comercio intrarregional continúa siendo bajo y los mecanismos existentes —como Mercosur, la Alianza del Pacífico o la Comunidad Andina— han tenido impactos desiguales debido a tensiones políticas, diferencias regulatorias y prioridades nacionales divergentes. Esta fragmentación resta competitividad y reduce la capacidad colectiva de la región para posicionarse de manera estratégica en la economía global.

Aún así, la región cuenta con ventajas estructurales que podrían impulsar una integración más profunda. La abundancia de recursos naturales clave para la transición

energética, la proximidad a grandes mercados y la posibilidad de articular cadenas de valor regionales, ofrecen bases sólidas para dinamizar economías, generar empleo de calidad y abordar disparidades internas. Una mayor coordinación en comercio, regulación y movilidad laboral podría traducirse en mayores inversiones y productividad.

Un ejemplo vigente es el de las reservas significativas de tierras raras. **Brasil**, por ejemplo, posee cerca del 23 % de las reservas globales, una de las principales fuentes potenciales fuera de Asia. No obstante, la capacidad de procesamiento intermedio —la transformación de minerales en productos útiles— sigue concentrada en **China**, que domina la mayor parte del refinado mundial, lo que mantiene a América Latina en una posición de proveedor de materia prima con poco valor agregado. Sin inversiones en infraestructura industrial y regulaciones ambientales y sociales robustas, la explotación de tierras raras podría reproducir patrones de dependencia externa y generar tensiones locales.

El fortalecimiento de la integración también puede contribuir a enfrentar problemas estructurales como la desigualdad y la pobreza, que erosionan la legitimidad democrática. Mercados más amplios y conectados permitirían reducir costos logísticos, expandir oportunidades laborales y mejorar la provisión de bienes y servicios. Con todos sus problemas, el Mercosur muestra el potencial de integración de la región. Desde su creación, el comercio entre los países del bloque pasó de unos USD 4,5 mil millones en 1991 a más de USD 33 mil millones en 2019, multiplicándose

por más de siete veces. Pero para que estos beneficios se sigan materializando, es indispensable avanzar en infraestructura, conectividad digital y marcos normativos comunes que aseguren beneficios compartidos.

Para que la integración regional se convierta en un motor real de desarrollo inclusivo, será necesario sostener liderazgos políticos estables, fortalecer instituciones y priorizar políticas de Estado que permitan capitalizar oportunidades sin reproducir asimetrías históricas.

TEMAS A OBSERVAR EN 2026

- **Relación Venezuela — Estados Unidos:** ¿fin del autoritarismo? La presión de **Estados Unidos** abre la puerta a especulaciones respecto a la posible caída o gradual liberalización del régimen autoritario en ese país. Si ese fuera el caso es posible que la ola expansiva del fin del autoritarismo en Caracas tenga un impacto sobre otros autoritarismos regionales como es el caso de **Cuba** y quizás de **Nicaragua**.
- **Posicionamiento geopolítico:** ¿Cuál será la deriva de la región en la puja de fuerzas entre **Estados Unidos** y **China**? ¿Cuál será el impacto de la estrategia de seguridad nacional de **Estados Unidos** para la región? ¿Qué pasará con el acuerdo Mercosur-UE?
- **Brasil, Colombia, Perú y Costa Rica** tendrán elecciones presidenciales. Los resultados en estos países están abiertos, aunque puede darse que se revierta la tendencia de ruptura con los oficialismos.
- **El Salvador** celebra elecciones presidenciales en febrero de 2027 y es de prever que durante 2026 se realicen aún más cambios institucionales y legales para favorecer la candidatura y posición del presidente Nayib Bukele, cerrando aún más el espacio democrático.
- Elecciones de funcionarios judiciales en **Guatemala**. Este año se renuevan autoridades en el Ministerio Público (bastión del denominado “Pacto de Corruptos” en los últimos años), del Tribunal Supremo Electoral y la Corte Constitucional. Se trata de un proceso clave para determinar el rumbo democrático de Guatemala con impacto en la región
- **La Organización de Estados Americanos (OEA) en el contexto regional:** El excanciller surinamés, Albert Ramdin, cumple un año en la secretaría general de la organización regional no sin pocos desafíos (acciones de **Estados Unidos** en el Caribe y **Venezuela**, crisis migratoria, violencia generalizada en **Haití**). Aún es pronto para sacar conclusiones, pero será interesante e importante ver cómo maneja los equilibrios en sus posiciones en el marco de las fuertes tensiones regionales.
- **La evolución de la crisis migratoria:** Con Venezuela como principal origen del flujo que avanza por Sudamérica y el Caribe rumbo al norte, todos los gobiernos del continente enfrentan una presión creciente. La magnitud de estos movimientos no solo genera tensiones sociales y políticas, sino que también amplía las oportunidades para el crimen organizado. La reacción social —alimentada por el temor, la desinformación o el desgaste institucional— abre espacio para respuestas populistas que profundizan la fragilidad democrática y contribuyen a la decadencia institucional de la región.
- **Los desafíos de la inteligencia artificial:** La región muestra un alto nivel de adopción en el uso de la IA. Según la encuesta Digital Consumer Insights 2024, el 76% de los encuestados digitales en **Brasil** y el 70% en **México** informaron usar IA generativa (LLMs), lo que supera el promedio global del 66%. Sin embargo, estas cifras no encuentran un corolario en los niveles de inversión. preocupa el bajo nivel de inversión: mientras la región representa el 6,6% del PIB global, recibe apenas el 1,12% de la inversión mundial en IA.



EDITORES

Jakub Klepal
Hernán Alberro
Rodrigo Lima



CONTRIBUYERON EN ESTA EDICIÓN

Hugo Acha
Isabel Aninat
Sandra Borda
Claudia Escobar
Saúl Hernández
Miguel Lara
Carlos Malamud
Mateo Rosales
Tamara Sujú





Forum 2000 Foundation
Pohořelec 6
118 00 Prague 1
Czech Republic

+420 224 310 991
secretariat@forum2000.cz

Follow us on
[Facebook](#) | [X](#) | [Youtube](#) | [LinkedIn](#)
[#Forum2000](#)

www.forum2000.cz

